

## *Ayotzinapa es México*

SERGIO RENÉ DE DIOS CORONA\*

Parecía un episodio más de violencia en el país. Una combinación de asesinatos con una desaparición colectiva forzada, como tantas ocurridas antes y durante los primeros años del regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República. No fue así. La detención y desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, cometido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, cimbró al país. Aunque el 6 de octubre el presidente Enrique Peña Nieto ordenó públicamente esclarecer los hechos, encontrar a los responsables y aplicar la ley, de poco sirvió: a 100 días de los hechos aún no se localizaba a los normalistas, las versiones oficiales de su posible destino fueron consideradas poco creíbles por expertos y continuaban prófugos personajes clave involucrados. El caso abrió la puerta al malestar nacional largamente acumulado. La indignación social estalló. Cientos de manifestaciones de protesta se realizaron en México y en decenas de naciones para exigir justicia y la presentación con vida de los jóvenes. Con fuerza se repitió en calles, muros, plazas y la Internet que se trató de un crimen de estado. La consigna de los años setenta del siglo XX sonó de nuevo: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

- Es periodista desde hace 30 años. Estudió la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, y la maestría en PNL. Ha trabajado en una docena de medios informativos. Ha publicado media docena de libros como autor o coautor. Actualmente es coordinador de la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Pública en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

Ayotzinapa exhibió con dolorosa crudeza la crisis de seguridad pública que, envuelta en la impunidad, enfrenta el país. El asesinato en Iguala de tres personas y tres estudiantes, más la desaparición de los 43 jóvenes, mostró la dimensión del drama nacional: se desconocía hasta principios de 2015 la suerte no solamente de los normalistas sino de una cifra que conservadoramente rebasa las 30,000 personas, víctimas de grupos delictivos coludidos con policías, militares y funcionarios públicos. Los vínculos de políticos con hampones quedaron de nuevo al desnudo, ejemplificados en Guerrero pero extendidos al resto de la nación. La denominada “narcopolítica” prosigue enraizada en la estructura burocrática gubernamental. Para los ciudadanos resultó claro que Ayotzinapa es una réplica de lo que sucede en todo el territorio nacional. Ayotzinapa es México. México es Ayotzinapa.

Desde el ataque y la desaparición de los normalistas los acontecimientos se vinieron unos tras otros, velozmente: el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, fue obligado a solicitar licencia; lo sustituyó interinamente Salvador Rogelio Ortega Martínez; el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, huyeron del municipio, pero semanas más tarde fueron detenidos por su presunta responsabilidad en delincuencia organizada y ordenar se atacara a los normalistas cuando arribaron en camiones al municipio; el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que avaló las candidaturas y cobijó tanto al gobernador como al alcalde defenestrados, cayó en el descrédito político y entró en división y crisis interna; Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), manejó que los normalistas fueron incinerados en un basurero y solo quedaron pequeños huesos y cenizas, lo que fue descreído por expertos que manejan la hipótesis de que podrían haber sido incinerados en otro lado; la Conferencia del Episcopado Mexicano condenó tardíamente la desaparición y sin mucho énfasis, a diferencia de sacerdotes como Alejandro Solalinde o el obispo Raúl Vera López, quien señaló que el estado se convirtió en una “institución criminal”; más de 90 policías de Iguala y Cocula, así como presuntos sicarios del

grupo criminal Guerreros Unidos fueron detenidos como probables partícipes en el ataque a los normalistas; profesores organizados en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG) promovieron diversas movilizaciones, en las que fueron incendiados edificios gubernamentales, tomadas oficinas y bloqueadas carreteras, para reclamar la presentación de los normalistas; se convocó a cientos de marchas y a un paro nacional que halló eco en más de 80 instituciones y universidades públicas y privadas, entre otros acontecimientos. La irritación se apoderó del espacio público.

Mientras las autoridades federales continuaban sin hallar a los normalistas y descubrían decenas de cuerpos en fosas clandestinas de la región de Iguala, a dos semanas del secuestro una investigación periodística reveló que la pareja presidencial, Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera, poseían una lujosa residencia, valuada en siete millones de dólares, en la calle Sierra Gorda 150, en Lomas de Chapultepec, que estaba a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, sociedad anónima que pertenece al corporativo empresarial Higa. El equipo de Aristegui Noticias mostró que la compañía del Grupo Higa había sido beneficiaria de contratos con el gobierno del Estado de México, cuando lo encabezó Peña Nieto, y con el propio gobierno federal. El mal logrado intento de Angélica Rivera de justificar la posesión del inmueble desató en las redes sociales y en medios nacionales y extranjeros una nueva oleada de críticas a la exactriz de Televisa y al presidente de la república. La denominada “casa blanca” puso en evidencia el conflicto de intereses, pero ninguna autoridad investigó ni documentó posibles delitos o irregularidades cometidas. El gobierno federal le apostó a que el caso se olvidara mediáticamente y la mayoría de la prensa se alineó con su versión. Sin embargo, apareció otra revelación: el 11 de diciembre, *The Wall Street Journal* publicó que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, compró en siete millones de pesos una residencia en el Club de Golf Malinalco, en el Estado de México, al empresario Juan Armando Hinojosa, quien es el mismo contratista del gobierno federal que financió la casa blanca de la pareja

presidencial. Aunque adquirió la propiedad dos meses antes de ser titular de Hacienda, Videgaray no es señalado por cometer un acto ilegal, pero esa compra-venta “se suma a los aparentes conflictos de intereses que han dañado la credibilidad y la popularidad del presidente Peña Nieto después de que llegó a Los Pinos con la promesa de romper con las prácticas del pasado del Partido Revolucionario Institucional, en el que milita”, apuntó el diario.<sup>1</sup>

Sin ser los únicos factores, pero sí los más relevantes, la crisis nacional de inseguridad pública, la crisis humanitaria por las decenas de miles de desaparecidos y heridos en el país y la crisis de credibilidad que cuarteó la aparentemente sólida coraza del grupo en el poder, se sumaron para conducir al gobierno de Peña Nieto a enfrentar una crisis política de gran alcance y profundidad. El descontento social con su administración se atizó, a pesar de que durante su gestión presumió como avances la aprobación de distintas reformas que avalaron los partidos políticos. Con Ayotzinapa y la casa blanca el liderazgo institucional del titular del Ejecutivo se vino otra vez abajo. El índice de reprobación del presidente aumentó de nuevo hasta rebasar más de 50%, según diversas encuestas de opinión.

Al comenzar 2015, con elecciones federales intermedias, más las estatales y municipales a realizarse en junio, tanto el equipo gobernante como su partido, el PRI, enfrentaban un escenario político adverso. Se encaminaron a los comicios en tanto resonaban las exigencias en las protestas de que Peña Nieto renunciara al cargo. El escenario de una posible respuesta violenta, como ha sucedido históricamente durante gobiernos en manos del partido tricolor, no era descartado por organizaciones de la sociedad civil. Pese a ello, se mantuvieron las movilizaciones, encabezadas por los padres de familia de los normalistas, con la participación de miles de estudiantes y jóvenes, especialmente

1. Roberto González Amador. “Videgaray también compró casa con crédito de Hinojosa: WSJ”, en *La Jornada*, México, 12 de diciembre de 2014, p.3.

en Guerrero y la ciudad de México. Ante la cercanía de los comicios el debate de las agrupaciones apartidistas parecía inclinarse sobre si se convocaba o no al abstencionismo electoral. También se discutía de manera inicial sobre la posibilidad de convocar a un nuevo constituyente y a ponerle estructura al descontento ciudadano. La lucha por la paz, la justicia y contra la corrupción y la impunidad, se avizoraba, quedaría entrelazada con las campañas de los candidatos a un cargo de elección popular. Los partidos políticos y la sociedad civil caminaban cada quien por su lado, con distintas agendas.

## 1. LA VERTEBRACIÓN DEL ENOJO

Las escuelas normales rurales mexicanas son producto de la revolución mexicana de 1910. Su objetivo era y es formar profesores que lleven la educación a sus comunidades, por lo regular asentadas en zonas lejanas, poco comunicadas, agrarias y en muchas ocasiones empobrecidas. La primera normal rural se abrió en 1922, en Tacámbaro, Michoacán, por lo que se acercan al siglo de existencia. Estas instituciones han sido atacadas y dejadas sin apoyo alguno por la propia Secretaría de Educación Pública, tanto en sexenios priistas como panistas. De hecho, la mayoría quedaron abandonadas a su suerte. Para jóvenes de familias marginadas que habitan en el medio rural mexicano estos planteles representan su única opción formativa y para buscar mejores opciones de empleo, como ocurre en la de Ayotzinapa.

Pocos meses antes de la desaparición de los estudiantes fueron torturadas y ejecutadas 22 personas en una bodega de Tlatlaya, municipio de San Pedro Limón, Estado de México. Esto ocurrió el 30 de junio de 2014. Presuntamente los victimarios fueron militares del 102 Batallón de Infantería. Los familiares de las víctimas denunciaron que los jóvenes muertos, 21 varones y una mujer, habían sido secuestrados por delincuentes. El crimen colectivo fue denunciado por la prensa internacional y las autoridades pretendieron minimizarlo, al aseverar que se trató de un enfrentamiento entre un grupo de narcotraficantes

y elementos castrenses. Al darse a conocer los testimonios de testigos que contradecían la versión oficial, fueron detenidos tres soldados y un teniente como posibles responsables. Ningún alto mando del ejército ha sido inculpado.

En el caso de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, nombre oficial de la institución de Ayotzinapa, ubicada en el municipio de Tixtla, ya habían sido victimados dos estudiantes en diciembre de 2011. En esa ocasión cientos de normalistas y campesinos bloqueaban la autopista del Sol México–Acapulco y la carretera federal a la altura de Chilpancingo, para demandar una audiencia con el entonces gobernador Ángel Aguirre, quien los había dejado plantados cuatro ocasiones, y expresarle diversas demandas. En lugar de un espacio en la agenda del gobernador, fueron agredidos: policías estatales, ministeriales y federales desalojaron con violencia a los jóvenes y asesinaron a balazos a dos de ellos.

Con ese antecedente, y cuando lo sucedido en Tlatlaya aún se ventilaba en medios informativos como un caso impune de otra matanza colectiva en México, el 26 de septiembre de 2014 los normalistas de Ayotzinapa salieron de su plantel rumbo a Iguala para organizar colectas. Viajaban en dos autobuses de pasajeros. Pretendían pedir apoyos y tomar camiones para trasladarse a la marcha que se realizaría el 2 de octubre en la ciudad de México, con otras escuelas normales rurales. En Iguala se apoderaron de tres camiones más. Sin embargo, sorpresivamente policías municipales bloquearon el paso de tres de los camiones y empezaron a dispararles a los normalistas, que estaban desarmados y respondieron con piedras. Poco después, de nuevo los atacaron a balazos en otro punto de la ciudad. Un equipo de fútbol que se trasladaba en otro camión fue confundido por los agresores y baleado, por lo que murieron dos personas en esa unidad y una que viajaba en un taxi. El saldo: tres normalistas asesinados, tres personas más muertas, una veintena de lesionados y 56 desaparecidos, de los que 13 fueron hallados luego en sus casas, con lo que la cifra definitiva quedó en 43 jóvenes que no regresaron a sus hogares.

Las primeras versiones señalaban que la agresión a los normalistas ocurrió debido a que, supuestamente, pretendían interrumpir el informe que presentaba ese día la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Iguala. También, estudiantes que lograron salvar su vida apuntaron que entre los agresores se hallaban no solo policías municipales sino federales. A pesar de que en Iguala se halla un cuartel, los militares no salieron oportunamente a detener a los victimarios y fue hasta más tarde cuando recorrieron la ciudad e intentaron detener a las propias víctimas, a las que despojaron de sus celulares, según testimonio de los alumnos. No se reportó que esa noche los soldados hubieran capturado a ninguno de los agresores.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero comenzó las indagaciones el 27 de septiembre. En principio señaló que fueron asesinadas ocho personas en cuatro ataques en diversos sitios de Iguala y admitió que los agresores fueron policías municipales y grupos armados. Entre los fallecidos estaban integrantes del equipo de fútbol de tercera división Los Avispones de Chilpancingo. Uno de los normalistas victimados murió cruelmente desollado. Los vecinos se refugiaron en sus domicilios. El procurador estatal, Iñaky Blanco, declaró que cerca de 200 policías municipales fueron desarmados y acuartelados para investigarlos. Pronto se sabía que policías municipales de Iguala, coludidos con los de Cocula, entregaron a los estudiantes al grupo criminal Guerreros Unidos.

El alcalde igualteco aseguró que no supo de la agresión a los normalistas porque se hallaba en un baile del DIF con su esposa y descartó renunciar. Después se volvió “ilocalizable”. En realidad huyó de Guerrero con su pareja. El 29 de septiembre, dos días después de la agresión, profesores y estudiantes guerrerenses salieron a las calles para exigir justicia. Entre los participantes se hallaban normalistas agrupados en la Federación de Estudiantes Socialistas de México, que cargaron ataúdes de cartón. El descontento crecía. Las nueve normales rurales de Guerrero comenzaron un paro de labores. Ese día la procuraduría estatal detuvo a 22 policías de Iguala por su presunta participación en

el ataque. La solidaridad con las víctimas empezó a extenderse. Normalistas de Oaxaca tomaron el 30 de septiembre una caseta de cobro. Las familias sepultaron, en medio del llanto y el luto, a los asesinados. El pleno de la Cámara de Diputados exigió investigar los crímenes. La PGR se hizo cargo de las indagaciones.

Los participantes en la marcha por el aniversario de la matanza del 2 de octubre de 1968 en la ciudad de México demandaron presentar vivos a los normalistas. El 3 de octubre familiares de los desaparecidos se plantaron frente a las oficinas de la Secretaría de Gobernación, en la ciudad de México, para exigir ayuda en la búsqueda. Se dio de alta a 21 de los lesionados en Iguala. Las investigaciones realizadas por la PGR son caóticas y deficientes, denunció Amnistía Internacional. Los peritos forenses argentinos que llegaron para auxiliar a las familias no han tenido acceso a las fosas encontradas, añadió el organismo.

Decenas de miles de personas se movilizaron en diferentes entidades para protestar por el caso Ayotzinapa. El 22 de octubre se tomaron las calles en 31 ciudades de 20 estados del país, refiere la prensa. Los sobrevivientes a la matanza y desaparición narraron en diferentes medios informativos las horas de terror que padecieron cuando fueron baleados y perseguidos por policías y personas de civil con armas de alto poder. Periodistas recogieron relatos de familiares que describían el perfil de los jóvenes y reiteraban que no abandonarían la demanda de que se les encuentre. Para la PGR la línea de investigación era única: el alcalde de Iguala y su esposa ordenaron la violenta represión contra los estudiantes al considerar que bloquearían el informe de la presidenta del DIF. La procuraduría ofreció una recompensa global de 64.5 millones de pesos a quien diera información sobre el paradero de los normalistas. El padre Alejandro Solalinde declaró que participantes en la desaparición le confiaron que los estudiantes fueron asesinados y quemados con dísel.

La PGR prosiguió con las detenciones, unas en Guerrero y otras en Morelos, y a finales de octubre reveló que cuatro involucrados directos en la desaparición estaban declarando ante el Ministerio Público.



Voces del PRI vincularon a Andrés Manuel López Obrador con el alcalde de Iguala, pero el excandidato a la Presidencia de la República negó conocerlo. El 25 de octubre el Congreso del Estado de Guerrero aprobó la licencia del gobernador guerrerense Ángel Aguirre Rivero. Tras negociaciones con el PRD en la ciudad de México, el mandatario fue sustituido de manera interina por Rogelio Ortega Martínez, quien tomó protesta el 26 de octubre.

Los estudiantes anunciaron una marcha para el 30 de octubre y un paro nacional para el 5 de noviembre. Los contingentes de decenas de instituciones universitarias, públicas y privadas se alistaron para participar. En ambas fechas expresiones masivas de descontento y solidaridad movilizaron a docenas de miles de personas a lo largo del país. Fueron los más multitudinarios actos de protesta, a los que se sumaron desde niños hasta jóvenes y ancianos. Se trató de una megamarcha que llegó a la explanada del Zócalo, encabezada por los familiares de los desaparecidos, en solidaridad con sus demandas y con expresiones de “no están solos”.

El Consejo de la Presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano se pronunció el 28 de octubre con un llamado a las autoridades para que redoblaran esfuerzos por encontrar a los desaparecidos, sancionar a los culpables, hacer prevalecer el estado de derecho y garantizar así una vida digna y segura a los mexicanos. Los jerarcas reprobaron los acontecimientos de Ayotzinapa, se unieron a lo señalado previamente por los obispos de Acapulco para manifestar su solidaridad con los familiares de los desaparecidos por quienes, dijeron, habían orado de manera insistente a Dios.

Es hasta el 29 de octubre, poco después de un mes de la tragedia, cuando Peña Nieto se reunió con familiares de los jóvenes desaparecidos y, vía su cuenta en Twitter, garantizó que se llegaría hasta las últimas consecuencias y se hablaría con transparencia sobre lo ocurrido. Escribió que durante cinco horas escuchó con atención las preocupaciones y demandas de los familiares. No obstante, los padres de

familia señalaron en conferencia de prensa que no confiaban en Peña Nieto, que los compromisos adquiridos por el presidente no eran suficientes y que no les satisfacían los resultados de las investigaciones. Encuentren a nuestros hijos y no los criminalicen, reclamaron. Horas antes, los familiares habían marchado hasta acercarse a la residencia presidencial y lo harían de nuevo, en fechas posteriores, incluido el último día de 2014.

El cabildo de Iguala nombró el 29 de octubre a Luis Mazón como presidente municipal suplente. Los paros de labores, como sucedió en Oaxaca, la toma de oficinas del PRI, que ocurrió en Michoacán, y los bloqueos carreteros, entre otras protestas, continuaron. Según Peña Nieto, lo sucedido en Ayotzinapa empañó lo realizado por el gobierno y la sociedad en materia de seguridad pública.

La PGR dio a conocer el 30 de octubre que 10,000 elementos federales buscaban a los normalistas. Los rastrearon sin éxito en cuevas, pozos, ríos, túneles, minas, presas. A la búsqueda se sumaron, por su cuenta, días después, policías comunitarios y rurales que descubrieron más fosas clandestinas cerca de Iguala. Sumaban ya once las fosas halladas y 38 los cuerpos ahí inhumados ilegalmente, ninguno de normalistas. La ONU urgió encontrar a los estudiantes. El gobierno federal solicitó apoyo técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para localizar a los normalistas y firmó el 12 de noviembre un acuerdo con ese organismo. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que se investigaba al alcalde de Iguala desde 2010. Para la CIDH, los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa ponen en evidencia una crisis humanitaria en el país. El papa Francisco pidió en Roma rezar por los desaparecidos.

Alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se hallaban en paro total cuando estalló la violencia en Iguala. Luego de sus movilizaciones, recibieron un trato distinto al de los normalistas de Guerrero, pues fueron atendidos directamente por el secretario de Gobernación. Una de sus demandas era la destitución de la titular del Politécnico,

Yoloxóchitl Bustamante, lo cual lograron. Tras una serie de negociaciones los alumnos acordaron que regresarían a clases en enero de 2015. El movimiento mostró simpatías con los normalistas sin llegar a más.

Tras darse a conocer las desapariciones, desde los primeros días empezaron las manifestaciones internacionales de solidaridad. Una, entre muchos ejemplos, ocurrió frente a la sede de la Unión Europea, en Bélgica, cuando un centenar de personas, entre mexicanos y belgas, exhibieron pancartas en las que solicitaban la aparición con vida de los normalistas. Las muestras de apoyo ocurrieron en países como Estados Unidos, Francia, España, Argentina y decenas más. Incluso se recibieron muestras de apoyo en continentes como Asia. La presión hacia el gobierno mexicano desde otras naciones se intensificó en lo que restó de 2014.

La agresión fue prácticamente silenciada por la mayoría de los medios informativos con sede en la ciudad de México. O minimizaron la información o no difundieron nada de los acontecimientos durante los primeros días, pese a la gravedad de lo sucedido en Iguala. Fue hasta que el 6 de octubre Peña Nieto habló en torno a la agresión, diez días después, cuando las empresas abordaron la tragedia, como reveló un seguimiento realizado por profesores y estudiantes de la Universidad Iberoamericana. En algunos casos los medios se ciñeron exclusivamente a las versiones oficiales, sin dar voz a los normalistas ni a los organismos críticos. La censura y la autocensura predominaron. Uno de los ejemplos más patéticos ocurrió precisamente en Guerrero, cuando el *Diario de Guerrero* aplaudió la represión, criminalizó el actuar de los jóvenes y de hecho llamó al linchamiento al escribir como título principal de su portada de la edición del 27 de septiembre: “Por fin se pone orden”.

El entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, señaló que se cometieron graves omisiones y responsabilidades por parte del alcalde de Iguala y el gobernador

de Guerrero, y anunció que “en breve” emitiría una recomendación. El funcionario concluyó su periodo y fue relevado en el cargo en noviembre de 2014 por Luis Raúl González Pérez. El nuevo ombudsman nacional deploró las descalificaciones y los ataques que vía redes sociales se publican contra los jóvenes desaparecidos y sus familiares, urgió a que la autoridad esclarezca la desaparición de los normalistas, creó una oficina especial en Iguala y continuaba con la integración de la queja. Hasta principios de 2015 el organismo no había emitido ninguna recomendación.

Ante el fuerte control que ejercían grupos delictivos, la federación decidió a finales de octubre tomar el control político y policiaco en 16 municipios de Guerrero y uno del Estado de México. El 4 de noviembre fueron detenidos en el Distrito Federal el exalcalde de Iguala y su esposa y semanas después fueron trasladados a penales de alta seguridad.

## 2. EL DEBATE PGR-CIENTÍFICOS

Un punto central en la versión oficial del paradero de los normalistas fue la conferencia de prensa dada por Murillo Karam, donde señaló que tres integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos confesaron que recibieron y ejecutaron a un grupo de más de 40 personas que les entregó la policía de Iguala y Cocula, que rociaron los cuerpos con diésel, les colocaron llantas y leña, y los quemaron en un basurero del segundo municipio. De acuerdo con el titular de la PGR, los delincuentes fracturaron los huesos y los calcinaron, para luego depositar los restos en bolsas y arrojarlas en el río San Juan. Añadió que peritos buscaron y hallaron bolsas con cenizas y pedazos de huesos, que se confirmó eran de humanos y serían enviados a Austria para determinar la identidad de las personas asesinadas, sin tener una fecha definida en que se tendrían los resultados. Murillo Karam mencionó que tras las investigaciones se sentía cansado, lo que fue criticado masivamente en las redes sociales y fue *trending topic* con el *hashtag* #Yamecansé.

La frase: “Todos somos Ayotzinapa” también corrió rápidamente por las redes sociales y se convirtió pronto en lema de las manifestaciones. Los familiares rechazaron la versión de la PGR y reiteraron que se les entreguen vivos a sus hijos.

Semanas después, dos investigadores universitarios, Jorge Antonio Montemayor, de la UNAM, y Pablo Ugalde, de la UAM Azcapotzalco, analizaron las declaraciones de Murillo Karam y consideraron que, científicamente, era imposible la incineración de cuerpos en el basurero de Cocula, como afirmó el procurador. Mediante un estudio, los académicos puntualizaron que no era factible ni física ni técnicamente esa incineración, tal como la mostró el funcionario federal, y sostuvieron que los restos óseos fueron cremados en otro lugar distinto. La PGR respondió que los argumentos de los científicos no estaban sustentados.

El 7 de diciembre el procurador General de la República confirmó que parte de los restos humanos encontrados en el municipio de Cocula eran de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 jóvenes normalistas, de acuerdo con los peritajes forenses realizados por la Universidad de Innsbruck, Austria. Los peritos argentinos que apoyaban a las familias de los desaparecidos habían informado por su parte que, efectivamente, esos restos pertenecían al joven, pero aclararon que no fueron testigos del hallazgo. Hasta principios de 2015, Alexander era el único de los estudiantes identificado por las autoridades. Los otros 42 seguían desaparecidos. Los familiares reiteraron que no abandonarían la lucha hasta hallarlos a todos.

Sin que aparecieran aún los normalistas, el caso dio un vuelco el 4 de enero de 2015 cuando los investigadores que cuestionaron la versión de que los jóvenes fueron asesinados en un basurero de Cocula señalaron que analizaban la hipótesis de los que 43 estudiantes hayan sido incinerados en crematorios del ejército. En entrevista con el diario *La*

*Jornada* indicaron que los desaparecidos podrían haber sido llevados a crematorios militares y privados, con instalaciones suficientemente grandes y con morgue.<sup>2</sup> Los científicos señalaron que el ejército debería permitir revisar la bitácora del uso de sus crematorios y los recibos del consumo de gas.

Al comenzar 2015, el destino de los normalistas continuaba en la incertidumbre.

2. Sanjuana Martínez. “Los 43 pudieron haber sido incinerados en crematorios del Ejército: especialistas”, en *La Jornada*, México, 4 de enero de 2015, p.8.